

Artículo Monográfico
Las penas privativas de libertad: La pena de prisión. (Arts. 35 y 36 CP, modificados por la LO 15/2003):

Ignacio Serrano Butragueño Abogado. Ex Magistrado

¿Cómo queda el catálogo de penas privativas de libertad?

Tras la supresión de la pena de arresto de fines de semana, y la introducción de la pena de localización permanente, nuestro CP considera penas privativas de libertad: La prisión, la localización permanente, y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa.

¿Por qué se ha suprimido la pena de arrestos de fines de semana y por qué otras penas se ha sustituido?

La supresión de la pena de arrestos de fin de semana obedece a razones económicas (resultaba muy cara su ejecución) y a su discutida eficacia, pues al depender su cumplimiento de la propia voluntad de los penados, debiendo presentarse ellos mismos en la cárcel, se alcanzaban niveles de quebrantamiento muy elevados; de modo que se producían continuamente nuevos y costosos procedimientos penales por delitos de quebrantamiento de condena. Por otro lado, la pena suprimida, según reza la propia exposición de motivos de la LO 15/2003, se ha sustituido en algún caso por la prisión de corta duración; en otros por la de trabajos en beneficio de la comunidad; y en otros, en fin, por la pena de localización permanente.

¿Cuál es la duración mínima y máxima de la pena de prisión?

El límite mínimo de la pena de prisión se ha reducido de seis a tres meses, y la extensión máxima, a pesar de que como pena tipo se limita a veinte años, llega hasta los treinta años en algunos supuestos (ver arts. 473, 485, 572 y 605 CP).

¿Cómo se ejecuta la pena de prisión?

Se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en el propio CP, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 y el Reglamento penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, con sus actualizaciones y modificaciones posteriores. Una vez firme la condena, y el reo en prisión, se procede al estudio científico de su personalidad, tras de lo cual y en atención al delito cometido, a la pena impuesta, a sus antecedentes, su comportamiento, y sus circunstancias personales, se procede a la clasificación del penado en el grado de tratamiento que proceda (1º, 2º ó 3º), cumpliendo la condena según el sistema progresivo, lo que le permite ir avanzando de grado si observa buen comportamiento. Por fin, el último período de la pena de prisión suele pasarse en libertad condicional, que algunos consideran como el 4º grado de tratamiento penitenciario, si bien, realmente, ya es una situación extrapenitenciaria.

¿A qué se llaman beneficios penitenciarios y, en concreto, cuáles de ellos suponen acortamiento de la condena?

El reglamento penitenciario (RP) prevé para los reclusos recompensas (premios en metálico, notas meritorias, comunicaciones especiales, becas, etc., ver art. 263 RP) y beneficios penitenciarios "que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en Sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento" (art. 202.1 RP). Así, supondría reducción de la condena, la concesión del llamado indulto técnico que la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario donde se encuentre el recluso, solicita del Juez de vigilancia penitenciaria para que lo tramite ante el Ministerio de Justicia (art. 206 RP). Y supondría reducción del tiempo efectivo de internamiento, el adelantamiento de la libertad condicional (art. 205 RP).

¿Qué límites impone el art. 36 CP a la clasificación de los reclusos?

El art. 36.2 distingue entre penas de prisión impuestas en Sentencia superiores a cinco años, y las impuestas hasta cinco años; por cuanto si excede de dicha extensión, la clasificación en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá obtenerse hasta cumplida la mitad de la pena impuesta. A mi juicio, esta limitación restrictiva de derechos de los penados, no debe aplicarse a hechos -ni a ejecución de penas por hechos-, cometidos antes de su entrada en vigor. Aunque no faltan opiniones discrepantes.

En todo caso, el Juez de vigilancia, a instancia del Centro penitenciario puede acordar la aplicación del régimen general de cumplimiento; es decir, no tener en cuenta dicho límite, salvo que se trate de penas por delitos de terrorismo o cometidos a través de organizaciones criminales.

¿Qué diferencias resultan en cuanto al régimen de cumplimiento?

Cada grado de tratamiento penitenciario lleva aparejado un régimen de vida distinto dentro de la cárcel, siendo mucho más severo el primer grado (con constantes recuentos y cacheos, sin permisos de salida, con pocas posibilidades de recibir paquetes, de realizar llamadas telefónicas al exterior, de recibir visitas, de agruparse o reunirse con otros internos, etc.) y mucho más relajado el tercer grado, que es el antecedente inmediato de la libertad condicional y, por tanto, de la vida en libertad. De ahí, que grado de tratamiento penitenciario y régimen de vida carcelario se encuentren íntimamente unidos.

Por su parte, tras la reforma del art. 36 CP, pueden establecerse tres apartados: Por un lado y como forma más restrictiva, la ejecución de las penas por delitos de terrorismo o cometidos por medio de organizaciones criminales, especialmente cuando se dé alguno de los supuestos del art. 76.1 letras a), b), c) y d) del CP. En tales casos, la clasificación en grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salida, la libertad condicional, y los beneficios penitenciarios se harán teniendo en cuenta la totalidad de las penas impuestas en la Sentencia, y no los límites de cumplimiento previstos en el citado art. 76 (ver también el art. 78 CP, ambos modificados por la L.O. 7/2003).

Por otro lado, como forma intermedia, la ejecución de las penas de prisión superiores a cinco años, sin que las mismas tengan que ver con delitos de terrorismo ni con organizaciones criminales. El régimen de cumplimiento de estas penas no permite la clasificación en tercer grado del penado hasta cumplida la mitad de la condena de forma efectiva, salvo que otra cosa acuerde el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Y en tercer lugar, la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta cinco años de duración, que permite, ya desde su inicio, la clasificación del reo en el tercer grado de tratamiento penitenciario y la realización del régimen de vida que dicho grado lleva aparejado.